

## **El bienestar futuro de los mayores en el sur de Europa\***

Sebastián Sarasa Urdiola

Departamento de Ciencias Políticas y Sociales

Universitat Pompeu Fabra

La tendencia en el riesgo de pobreza entre las generaciones extremas está siguiendo una pauta común en todos los países del sur de Europa que es preocupante. Entre los años 2005 y 2013, según los datos publicados por Eurostat, la pobreza entre los mayores de 65 años se ha reducido en una media del 36 por ciento en Italia, Portugal, España, Chipre y Malta. ¿Porqué esta buena noticia ha de ser preocupante? Porque viene acompañada de otra, nada halagüeña para las futuras cohortes de mayores, a saber, que la pobreza entre los menores de 16 años ha crecido un 26 por ciento en esos mismos países. La crisis actual ha puesto de manifiesto, en países como España, una situación de desequilibrio en el poder político que podría ser utilizado como ejemplo de un supuesto conflicto entre generaciones. Mientras que el paro ha fustigado duramente a las familias en fase de procreación, los gobiernos central, autonómicos y locales han reducido sus presupuestos en becas de estudios, servicios de preescolar, becas comedor y otras partidas de asistencia social de las cuales se benefician en gran medida los menores de edad. Por el contrario, las pensiones de jubilación se han mantenido congeladas, pero en un contexto de caída generalizada de las rentas del trabajo, la congelación ha significado un mal menor frente a las condiciones de vida que tienen que soportar buena parte de los activos. En el sur de Europa, no sólo el gasto social es claramente favorable a los jubilados, como ocurre en muchos otros países, sino que las restricciones de gasto social derivadas de la crisis, escasamente han afectado a los jubilados, mientras que las rentas del trabajo han caído dramáticamente entre los activos. En consecuencia, la pobreza infantil, ya de por sí muy elevada en España, ha aumentado a niveles escandalosos, sin que ello haya empujado a las autoridades a instituir una red de protección a la infancia que es común en muchos países de la UE. Tampoco las autoridades en el sur de Europa han apostado por el desarrollo de servicios de atención a la infancia y a los adultos dependientes, lo que constituye una fuente primordial de empleo femenino que ayuda a reducir la pobreza infantil.

---

\* El contenido de este escrito está basado en trabajos previamente publicados por el autor. Sobre todo en los artículos de G. Esping-Andersen y S. Sarasa (2002), *The generational conflict reconsidered*; *Journal of European Social Policy*, 12(1): 5-22; S. Sarasa (2013), *Cambios demográficos, protección social y pobreza*, en *Presupuesto y gasto público*, 71: 127-142, y S. Sarasa (2012), *Crisis económica y pobreza infantil en algunos países de la Unión Europea*, en V. Navarro y M. Clua-Losada (eds.) *El impacto de la crisis en las familias y en la infancia*; Barcelona: Ariel, pp. 17-56.

Abundan los analistas políticos que consideran esta situación como el resultado lógico de un desequilibrio de poder entre los mayores que votan y los menores que no tienen derecho sufragio. Sin embargo, es falso que, en sentido estricto, deba haber un conflicto de intereses universal entre generaciones. De hecho, que haya o no conflicto depende del sistema político de cada país y de cómo están institucionalizados los canales a través de los cuales fluyen los intereses cívicos hacia los partidos políticos. Es en las sociedades con menor coordinación de las entidades cívicas que el sesgo a favor de las generaciones actuales de jubilados es más elevado, como ocurre en la Europa del sur, donde el sesgo a favor de los jubilados es mayor que en cualquier otro régimen de bienestar entre los estados de la OECD.

En teoría, la distribución de recursos entre generaciones no es un juego de suma cero si se adopta una perspectiva de análisis dinámico de las generaciones. El bienestar de los jubilados depende sus historiales laborales pasados, de la capacidad de generar riqueza de los activos y de las lógicas políticas que impulsan sistemas de protección social. Siguiendo el mismo razonamiento, el bienestar actual de los niños, condiciona las oportunidades vitales que tendrán en su edad adulta y sus recursos acumulados cuando alcancen la edad de jubilación. Además, los recursos que generen, y la productividad en su etapa adulta, condicionarán la sostenibilidad del sistema de protección social de los mayores. Si una parte importante de los activos han de tener empleo precarios y padecer largos períodos de desempleo, debido a las consecuencias derivadas de un desarrollo pobre en su etapa infantil, su contribución neta al sistema de protección social será escasa, dado que sus bajos salarios no permitirán elevadas contribuciones fiscales, y su riesgo de desempleo les convertirá en usuarios recurrentes de las prestaciones por desempleo y de los servicios de asistencia social, mermando la capacidad del sistema para atender a las personas mayores.

El bienestar de los jubilados de hoy, es consecuencia en buena medida de la evolución del país en los pasados 50 años, y el bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales. El historial laboral que ha tenido la mayoría de los jubilados actuales ha sido espléndido, con empleos estables y buenos salarios, pero las próximas cohortes de jubilados cada vez tendrán peores historiales, y en especial la cohorte demográfica nacida en los años 60 que ha sido afectada por la destrucción de empleo en la presente crisis a la edad en que su actividad laboral es fundamental para determinar el importe de la pensión de jubilación.

En los años 60 del siglo XX casi todos los países desarrollados llevaron a cabo reformas en sus sistemas de pensiones que condujeron a una reducción notable en el riesgo de pobreza de los jubilados. A finales del siglo XX, son muchos los países que han iniciado una política orientada a reducir el riesgo de pobreza infantil, pero

esta ola todavía no ha bañado el sur de Europa. El interés por el bienestar infantil responde a la presión social, en buena medida ejercida por el movimiento feminista, y al interés de las élites políticas y económicas por mejorar el capital humano y hacer más competitivas las economías nacionales, pero también ha sido la respuesta a un aumento de la pobreza infantil inducido por el aumento en la inestabilidad familiar y el crecimiento de las familias monoparentales, que cada vez es más frecuente en los estratos sociales menos favorecidos. Es un hecho incontestable que la elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores, lo cual ha de afectar a la capacidad de los regímenes de Seguridad Social y a los sistemas sanitarios y de servicios sociales para atender las necesidades derivadas del envejecimiento de la población. En suma, es preocupante que el decantamiento a favor de la generación actual de mayores, se efectúe minando el bienestar de las generaciones futuras de jubilados.